



Después de la firma

99



POR RODRIGO BOTERO

Experto en medioambiente y conflicto.

■ En los años venideros, la Amazonia albergará los problemas del posconflicto y el Estado deberá decidir de una vez por todas si se hace presente o no.



MEJORAR la educación de los niños del Amazonas es una prioridad.

La Amazonia colombiana tiene todos los gradientes de conflictividad (sea esta armada o no) que tiene el resto del país. Es, además, un territorio, que como pocos, presenta las condiciones de presencia estatal más reducida y débil del territorio colombiano, así como tres condiciones singulares: la mayor cantidad de bosques, áreas protegidas y resguardos indígenas del país.

Esta región, que comprende casi el 45 por ciento del territorio nacional, refleja la visión centralista de un Estado que veía la selva como la manigua, un lugar donde ni las increíbles diversidad cultural y natural bastaron para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad regional y de hacer un ejercicio real de participación social, mucho menos de dedicar recursos a propiciar una gobernanza efectiva.

Solo cuando se consolidó como territorio de conflicto armado, cultivos de coca, minería ilegal, deforestación incontrolada, fronteras permeables, y demás males, vino a aparecer en el radar de la política nacional. Y ahora revista SEMANA, que buscaba periodistas nacidos en el Amazonas para escribir en esta edición, encontró que poco espacio queda para el periodismo en un lugar al que las noticias del resto del país no llegan o llegan tarde. No obstante, en el marco de los acuerdos de paz de La Habana y luego de la firma, esta región cobrará protagonismo y los retos que presenta son profundos.

De un lado, está su institucionalidad regional compleja, marcada por



LA PAZ para este departamento es distinta al fin del conflicto con las Farc.

FOTOGRAFÍA: ANDRÉS GARCÍA

prácticas clientelistas, en ocasiones corrupta, débil técnica y financieramente, así como con resistencias a aceptar formas reales de participación social en la toma de decisiones. De otro, su población, que ha sido maltratada en el transcurso del conflicto armado, ya sea como víctima directa de la violencia o de la falta de reconocimiento de sus de-

En los territorios indígenas urge una descentralización real que le permita a los resguardos ejercer plenamente los derechos de administración territorial, comenzando con Amazonas y Vaupés como casos piloto.

De ahora en adelante, la Amazonia funcionará como nicho de los problemas del posconflicto (minería ilegal,

devastar el ambiente y se descontrolen en el manejo de los recursos naturales. Allí, la participación de las comunidades en el diálogo sobre el futuro de las zonas que habitan resulta innegociable, así como la presencia, coherente, de las diferentes agencias del Estado.

Aún así, sin duda, el mayor interrogante que surge al imaginarse el futuro de la Amazonia en la transición hacia la paz, es cómo lograr todo esto cuando los colombianos que pueblan ese territorio solo encuentran como medio de subsistencia las economías ilegales. ¿Podrá, desde Bogotá, el Estado ofrecerle a esta gente alternativas laborales más rentables y fijas que la minería ilegal, la coca y el comercio ilegal de madera? ■

POCO ESPACIO QUEDA PARA EL PERIODISMO EN UN LUGAR AL QUE LAS NOTICIAS DEL RESTO DEL PAÍS NO LLEGAN O LLEGAN TARDE

rechos, que en función de la supervivencia en el territorio termina siendo cooptada por el poder local de turno.

La Amazonia sigue siendo objeto de la planificación del desarrollo económico nacional sin consideraciones suficientes sobre aspectos estructurales, tales como la necesidad de proponer y consensuar un límite a la frontera agropecuaria y de poblamiento, que concentre la prestación de servicios del Estado de manera eficiente, para lo cual debe establecer procesos de límite de la expansión sectorial (carreteras, petróleo, minería, agroindustria) y formalización de la propiedad que permitan a la población ser sujeto de derechos y deberes de ciudadanía básicos.

devastación ambiental, fronteras de colonización, etcétera.) y planteará una necesidad afín al resto de territorios marginados del país: que el Estado defina dónde y cómo focalizará sus esfuerzos para concentrar los servicios que prestaría una institucionalidad sólida por medio de una política de ordenamiento territorial, de tal manera que existan los mecanismos suficientes para impedir nuevos fenómenos de ilegalidad y deterioro ambiental acelerado.

Algo para no olvidar es que en una Colombia libre de Farc, una reingeniería institucional es clave para evitar que a falta de la autoridad ambiental que en algunos casos asumió esa guerrilla, las poblaciones se desboquen a

FIN DEL SALDO

Aunque muchos creen que Amazonas se salvó del conflicto, según cifras del Registro Único de Víctimas, la guerra en este departamento ha obligado a 2.277 personas a desplazarse hacia otras ciudades del país. La presencia de grupos armados ilegales y la disputa por territorios han ocasionado, además, 209 homicidios, 7 personas afectadas por minas antipersonal y 11 delitos sexuales.